



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ejecutivo Conexo
Radicación:	05129-31-03-001-2021-00257
Ejecutante:	Alveiro de Jesús Chavarriaga
Ejecutado:	Mina la Margarita S.A.S.
Asunto:	Apelación sentencia anticipada
Procedencia:	Juzgado Civil del Circuito Caldas (Ant)
Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Sentencia anticipada

Medellín, julio veintinueve (29) de dos mil veintidós (2022)

Corresponde a la Sala entrar a decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutada contra de la sentencia anticipada proferida el 7 de marzo del 2022, en el trámite del proceso ejecutivo conexo, promovido por el señor ALVEIRO DE JESÚS CHAVARRIAGA en contra de la MINA LA MARGARITA S.A.S. Radicado 05129-31-03-001-2021-00257-01., no obstante, advierte este juez plural que se configura una causal insaneable de nulidad de la actuación, como se explica:

1. ANTECEDENTES

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas, procedió a dictar sentencia anticipada el siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022), por medio de la cual declaró no probada la excepción de pago total de la obligación, ordenando seguir adelante la ejecución conforme al mandamiento de pago

y la actualización de la condena realizada en la sentencia. Decisión que fue apelada por la parte ejecutada.

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece las causales de procedencia de la sentencia anticipada:

“(…) Artículo 278. Clases de Providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.

(…)

En cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:

1. Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.

2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.

3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa (...).”

El ordenamiento procedimental del trabajo y la seguridad social, no regula la figura de sentencia anticipada, por lo que, en principio, el Juez laboral, no está facultado para proferirla.

Si bien, con la reforma procedimental contenida en la Ley 1149 de 2007, el legislador, en el artículo 47, estableció la facultad para ordenar el pago de acreencias laborales en forma anticipada, al disponer que *“si en la audiencia o en cualquier etapa del proceso resultan probadas con documento pretensiones de la demanda que versan sobre derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, el juez ordenará el pago y el proceso continuará en relación con las demás pretensiones”*, tal norma que fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional, en la sentencia C470 de 2011, al considerar que en materia laboral no resulta procedente esta prerrogativa :

“En efecto, sin ignorar que podrían generarse algunos beneficios de la aplicación de esta norma, la Corte observa que son mayores las dificultades que de ella pueden resultar, en primer término, para los empleadores, parte que en todos los

casos sería la directamente afectada por la decisión que en desarrollo de la misma se tomaría, pero también para el sistema judicial en su conjunto.

Esta apreciación deriva del hecho de que, pese a las precauciones previstas en la norma, que en principio impedirían su aplicación salvo que exista una prueba cierta y confiable del derecho reclamado, es posible en todo caso que se adopten decisiones, concretamente órdenes de pago, que carezcan del suficiente debate probatorio previo, y especialmente que no observen debidamente el principio de contradicción de la prueba, las que sin duda serían lesivas para la parte a cuyo cargo se ordena el pago”.

No obstante lo anterior, tampoco es posible concluir de plano, la improcedencia de la sentencia anticipada en materia laboral, porque con ello se desconoce el carácter supletivo de las disposiciones del Código General del Proceso, en el trámite adjetivo laboral, en virtud del principio de integración normativa, conforme lo dispuso el legislador, en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en el artículo 1º del mismo Código General del Proceso, así como la finalidad de la sentencia anticipada, que no es otra que materializar los principios de celeridad y economía procesal, en armonía con el mandato del artículo 4 de la ley estatutaria de Administración de Justicia y el artículo 48 del Código Procesal Laboral; de ahí que en algunos asuntos su aplicación puede ser acertada, pero en todo caso su aplicación está restringida a las tres causales descritas en el artículo 278 del Código General del Proceso, ya citado.

Pues bien en el asunto que concita la atención de la Sala, la sentencia anticipada no resulta procedente, porque si bien la misma, por definición, conlleva la supresión de etapas procesales, que resultan innecesarias, de manera alguna constituye una excepción al principio de oralidad, que en materia laboral es inexcusable en los términos del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que dispone “*las actuaciones judiciales y la práctica de pruebas en las instancias, se efectuarán oralmente en audiencia pública, so pena de nulidad, salvo las que expresamente señalen la ley*”.

En este contexto, la sentencia anticipada proferida, desconoce el principio de oralidad que rige las actuaciones laborales, razón por la cual se incurre en la causal de nulidad específica prevista en el artículo 42 del Código Procesal Laboral, norma que expresamente señala que en los procesos ejecutivos

aplicará el principio de oralidad y publicidad en la práctica de pruebas y en la decisión de excepciones, nulidad que es insaneable, en primer lugar, se itera, por la previsión del multicitado artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y en segundo lugar, por su carácter supralegal, al tratarse del quebrantamiento de las reglas propias del juicio, garantía propia del debido proceso constitucional consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, siendo claro, que tratándose de un juicio ejecutivo, lo procedente era la realización de la audiencia de resolución de excepciones.

Aunado a lo expuesto y no menos importante es que, la a quo no tuvo en cuenta que a diferencia de lo que ocurre en el proceso ejecutivo civil, la providencia mediante la cual se resuelven las excepciones en el proceso ejecutivo laboral, corresponde a un auto y no una sentencia, así lo señala expresamente el artículo 65 del estatuto procesal laboral, cuando indica que las excepciones en el proceso ejecutivo laboral se resuelven mediante auto susceptible de ser recurrido en apelación.

Destacando además, que no encuentra esta judicatura justificación alguna para que el juzgado cognoscente profiriera la sentencia anticipada, toda vez que la misma se justifica a partir de la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal y en asunto bajo estudio, mediante auto del 29 de octubre de 2021, se fijó como fecha para la celebración de la audiencia de resolución de excepciones el 8 de marzo de 2022 y la sentencia anticipada data del 7 de marzo de 2022, es decir, se profirió el día anterior al señalado para la audiencia.

En consecuencia, la providencia desatiende las formas propias del proceso ejecutivo laboral, lo cual conduce a nulitar la sentencia anticipada proferida el 7 de marzo de 2022, según el mandato del artículo 137 del Código General del Proceso.

DECISION

En mérito de lo expuesto la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

RESUELVE

Se **DECLARA** la NULIDAD de la sentencia anticipada proferida el 7 de marzo de 2022, en consecuencia, se ordena al juzgado de origen, proceda a fijar fecha para llevar a cabo la audiencia pública y oral, en la que se resolverán las excepciones propuestas por el ejecutada.

La anterior decisión, se notifica en ESTADOS de conformidad el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No.133 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 1° de agosto de 2022

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario